

Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro.

**Visto y teniendo presente:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 483 A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada solidaria, en relación con la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valdivia que rechazó el recurso de nulidad que interpuso contra la sentencia de primer grado que desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva que interpuso e hizo lugar a la demanda, declarando injustificado el despido condenando a las demandadas a pagar solidariamente las prestaciones que indica, limitando la responsabilidad de la demandada solidaria al tiempo que la actora prestó servicios para ella.

**Segundo:** Que la legislación laboral ha señalado que es susceptible del recurso de unificación de jurisprudencia la resolución que falle el arbitrio de nulidad, a cuyo efecto indica que procede cuando *«respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia»*, constituyendo requisitos de admisibilidad, que deben ser controlados por esta Corte, su oportunidad, la existencia de fundamento y una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones a que se ha hecho referencia. La norma exige, asimismo, acompañar copia del o de los fallos que se invocan de fundamento, artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo.

**Tercero:** Que el recurrente plantea como materia de derecho objeto del juicio que pretende unificar, el *«criterio de aplicación del artículo 183-A del Código del Trabajo, en cuanto a quien, en cumplimiento de los requisitos que establece la ley puede atribuirse la calidad mandante o dueño de la obra»*.

**Cuarto:** Que la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad, basado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, argumentando que *«...el sentenciador, analizando detalladamente la prueba rendida, concluye que si bien los fondos para la realización de la obra provenían del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, era la Municipalidad de Panguipulli quien dirigía, controlaba y tenía las facultades sobre ella. A través de un razonamiento claro y preciso, identifica a dicha Municipalidad como mandante dueño de la obra y en consecuencia, rechaza la excepción de falta de legitimidad pasiva intentada por dicha parte. Posteriormente, en el considerando décimo quinto, la sentencia se detiene en el tipo de responsabilidad que le cabe a la Municipalidad de Panguipulli como mandante de la obra en la que participó como trabajadora la demandante. Nuevamente, aplicando el*



*régimen de subcontratación contenido en el Código del Trabajo y mediante un razonamiento claro y preciso, establece que su responsabilidad es solidaria”».*

*Agrega el fallo que «Lo que en realidad impugna el recurrente es la procedencia del régimen de subcontratación y la definición de su parte como mandante en la obra en cuestión porque esa es la base de la responsabilidad solidaria que le reconoce la sentencia. Esta Corte tendría que alterar los hechos asentados por el Tribunal para cambiar esta conclusión y ello le está vedado por la naturaleza y causal invocada en el recurso de nulidad».*

*Finaliza estableciendo que además «...el recurso adolece de deficiencias insalvables. Además de no encauzar el error de derecho alegado hacia el artículo 183 A del Código del Trabajo, sin siquiera mencionarlo dentro de las normas supuestamente vulneradas, agrega en la última parte de su petitorio que, al acoger el recurso, esta Corte “invalida parcialmente el procedimiento junto con la parte correspondiente de la sentencia definitiva referida, o en su caso sólo invalida parcialmente esta última, según corresponda por la causas legales invocadas (sic)”, petición improcedente a la luz de la causal del artículo 477 inciso primero, segunda parte».*

**Quinto:** Que, para efectos de contraste, la recurrente acompaña las sentencias dictadas por esta Corte en los autos rol N°36.493-2019 y los dictados por las Cortes de Apelaciones de Arica y Valparaíso, en los roles N°13-2019 y 466-2020, respetivamente.

*La primera de ellas estableció que «... Como se observa, el elemento sustantivo, a propósito de la determinación de la calidad de empresa principal, conforme el régimen de subcontratación laboral, no atiende a su configuración jurídica o naturaleza, sino a la circunstancia de que tal sujeto corresponda a la persona –sea natural o jurídica, de derecho público o privado–, que efectivamente sea la dueña de la faena u obra en la cual se debe desplegar el servicio o labor que fue subcontratada, y aquello es indiferente del lugar físico en que se verifiquen.*

*Dicha calidad, conforme se puede advertir del precepto en referencia, se vincula específicamente con la circunstancia de que la empresa mandante, sea la dueña de la obra o faena en que se desarrollan los servicios contratados, independiente del lugar físico en que se verifiquen.”*

*Desde esta perspectiva, es claro, como insinúa una de las sentencias de contraste, que existe una diferenciación relevante entre el dominio que una persona puede tener sobre un determinado inmueble, y la calidad de dueño de una faena u obra determinada, y que para configurar un régimen de responsabilidad en el ámbito de la subcontratación laboral es irrelevante el dominio sobre el espacio físico en que se realiza la obra encargada, sino que, lo sustancial, es que esta sea ejecutada para*



*quien es dueño de la faena, en cuanto concepto material relacionado con el sometimiento de la empresa contratista a su mando y dirección para efectos de disponer y controlar el cumplimiento del acuerdo respectivo. En otras palabras, en el contexto de la subcontratación, tiene el carácter de empresa principal no sólo aquella que es jurídicamente dueña de la obra específica, sino que también lo es, la entidad que se reserva para sí algún grado relevante de poder de dirección sobre la contratista, en cuanto le permite fiscalizar y orientar el cumplimiento del contrato en que se consagra el encargo, lo que en definitiva está relacionado con el fin que persigue y en el cual tiene un interés propio comprometido, como sería, en el caso de autos, el de desarrollar un plan habitacional para sus asociados.*

*Que, a juicio de esta Corte, y como ha sido declarado previamente en las causas Rol N° 15.843-19 y 24.147-19, entre otras, aquella es la postura jurisprudencial que debe preponderar sobre el asunto en examen, que contraría la consignada en el fallo impugnado, y que coincide con la propuesta por los fallos de contraste emanados de la Corte de Apelaciones de Arica, por lo que procede acoger el arbitrio de unificación de jurisprudencia, como se dirá».*

*En la segunda, se determinó «...Que, de lo expuesto por la demandada solidaria en el recurso, es posible advertir que lo objetado no dice relación con la causal que justifica el recurso, sino que lo que el recurrente reprocha son las consecuencias o conclusiones fácticas a las que arribó el Tribunal conforme a las probanzas producidas en el juicio, por lo que las pretendidas infracciones de derecho que se invocan, están referidas a la forma en que el Tribunal tuvo por acreditados los hechos y no al quebrantamiento de una o más leyes. En consecuencia, estando referido lo discutido a asuntos de hecho, la causal invocada debe ser desechada.*

*(...) Que, yerra nuevamente la recurrente al invocar la norma del artículo 477 del Código del Trabajo en el recurso de nulidad por cuanto en éste sólo se pueden debatir aspectos de derecho y no de hecho porque éstos se encuentran plenamente establecidos y determinados en la sentencia y por medio del recurso de nulidad no se puede lograr ni la revisión, ni la alteración de las circunstancias de hecho que ha establecido el fallo y conforme a lo señalado en los motivos precedentes, en el recurso de nulidad interpuesto se volvió a debatir respecto de asuntos que tienen relación única y exclusivamente con los hechos establecidos en la sentencia impugnada. Undécimo: Que, de los fundamentos señalados, queda de manifiesto que la sentencia no ha incurrido en infracción de ley al estimar que no resultan fundadas las normas legales supuestamente vulneradas, por lo que el recurso de nulidad debe ser desestimado».*



Finalmente, el tercer fallo aparejado, estableció: «...*Que como es posible advertir con la prueba documental se ha acreditado que el vínculo jurídico que une al concesionario con la Municipalidad de San Felipe (segundo contrato) es de naturaleza administrativa, denominado concesión de servicios, no siendo aplicable la figura del artículo 183 A, objeto del presente litigio; además, con características y elementos especiales*».

**Sexto:** Que como se aprecia, la materia de derecho propuesta en el recurso de unificación, en relación con la situación fáctica establecida y el razonamiento entregado por la judicatura del fondo, se distancia de lo resuelto en los fallos de contraste, puesto que en el primero de ellos fue establecido que resulta indiferente quién es el dueño del terreno en donde se desarrolla la obra, sino lo que interesa además, es el grado relevante de poder de dirección sobre el contratista; en el segundo no existe un pronunciamiento respecto sobre la materia discutida, toda vez que razona sobre la imposibilidad de variar los hechos fijados en la instancia y, finalmente, el último fallo trata sobre el contrato de concesión de servicios, situaciones que distan del marco fáctico fijado en la presente causa, donde fue instituido el vínculo de subcontratación en base a los hechos acreditados en la instancia, siendo el recurso desechado, además, por deficiencias en su interposición.

Así, al no concurrir identidad o similitud de antecedentes fácticos ni jurídicos, resulta imposible efectuar el cotejo que se requiere para la procedencia de este arbitrio excepcional y de derecho estricto, por lo tanto, sólo cabe declarar la inadmisibilidad del recurso deducido, teniendo particularmente en cuenta para así resolverlo, el carácter especialísimo y excepcional que le ha sido conferido por los artículos 483 y 483-A del Estatuto Laboral.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, **se declara inadmisibile** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada solidaria en contra de la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Regístrese y devuélvase.

N°251.028-2023.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., señor Diego Simpertigue L., ministro suplente señor Miguel Vázquez P., y los abogados integrantes señor Eduardo Morales R., y señora Carolina Coppo D. No firman los abogados integrantes señor Morales y señora Coppo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por ambos haber cesado en sus funciones. Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro.





En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

